

# Y ahora ¿qué?

Arturo Sosa y Pedro Trigo

Hay indicios de que los causantes de esta explosión no están interpretando ni respondiendo adecuadamente a lo que en ella se ha manifestado y a lo que el pueblo ha querido expresar. En primer lugar las Cámaras de alimentos y de transporte, los Bancos y FEDECAMARAS no sólo no han transgido en autolimitar un poco sus ganancias sino que han aprovechado la ocasión para presionar en posición de fuerza: abastecimiento con precios exorbitantes, amenaza de mayores aumentos en los pasajes, promesa del gobierno de asumir las cartas de crédito de la empresa privada... A nivel personal los propietarios han pasado miedo, incluso los más connotados se han visto a sí mismos como enemigos del pueblo y por eso han abandonado sus residencias buscando seguridad. Sin embargo en cuanto propietarios, sobre el miedo ha privado el instinto del negocio rápido, sin pensar en los riesgos. Parecieran haber perdido el sentido de la realidad. Independientemente de sus propósitos, su proceder es terrorista, una verdadera provocación de estallidos mucho peores. No toman en cuenta el conjunto de la situación nacional, sólo piensan en el corto plazo, han roto gravemente la solidaridad ciudadana y son responsables de lo que pueda pasar. Esperemos que no todos los empresarios se-  
an así.

En segundo lugar, el Estado no ha modificado el rumbo. Se ha contentado con repetir sus paliativos. Si el propio Presidente interpreta lo sucedido como un estallido de los pobres contra los ricos por el deterioro galopante de la situación económica y la frustración de sus expectativas, si tanto él como el ministro de la Defensa piensan que los sectores propietarios no están respondiendo al clamor popular, su labor como gobernante no puede restringirse a exhortarlos: tiene que poner unas reglas de juego que garanticen una mínima paz ciudadana. No basta con el empleo de la fuerza pública, pues entonces estamos en la dictadura vulgar de los dueños del capital sobre los que no lo tienen y el Estado sería sólo su brazo armado.

Además en el paquete de medidas falta la reforma tributaria, el sustantivo impuesto a la renta, además de cobrar los muchos miles de millones que deja de recaudar. Para poner el caso más clamoroso, no es un país serio sino salvaje aquel en el que los bancos prácticamente no paguen impuestos cuando ostentan además records de ganancias. Eso sucede en Venezuela. Eso es desestabilizador. Y el Estado es culpable. Y en este caso cómplice, porque el director del Banco Central es el representante de la banca privada.

Más aún el principal canal de los paliativos que ofrece el gobierno al pueblo lo constituyen las asociaciones de vecinos que como todos saben en su mayoría no son tales sino caciques politiqueros y sobre todo de Acción Democrática que se han cogido el poder antidemocráticamente y que lo administran de un modo clientelar como mera correa de transmisión de los dictados del partido. Fortalecer este tipo de organizaciones antipopulares es impedir que el pueblo pueda llegar a la mayoría de edad, ya que el pueblo organizado desde sí mismo sería el canal más seguro de estabilidad con justicia. Sólo si se confía en el pueblo y se estimula su propia organización y autosuperación, dentro de unas coordenadas económicas y sociales mínimamente aceptables, podrá abrirse cauce para que el pueblo pueda satisfacer poco a poco y con tremendo esfuerzo sus necesidades y aspiraciones.

Para esto la colaboración fundamental del Estado iría en dos frentes: El primero son los servicios que están absolutamente deteriorados y tienen que recomponerse con la colaboración del pueblo organizado, pero también con la activa participación del Estado. Nos referimos al agua, luz, vialidad, dispensarios, canchas deportivas, mercaditos populares y de un modo muy especial educación y salud. El segundo frente tiene que ver con la seguridad ciudadana. Tienen que cesar las redadas y el hostigamiento intimidatorio y masivo. Tiene que darse una acción coordinada de inteligencia y operativos dirigida es-

trictamente a los traficantes de droga, malandros yseudogerrilleros. Pero debe darse franca libertad para personas y grupos democráticos que dentro de los cauces pautados por la Constitución se ocupen de organizar y defender al pueblo en los distintos frentes y niveles.

Un último elemento tendiente a la paz ciudadana tiene que ver con los medios masivos de difusión. Han iniciado una campaña salvaje de culpabilización del pueblo y de desorientación colectiva. Eso no contribuye a la paz sino al resentimiento y a la cultura subterránea alternativa. Si los grandes propietarios de los medios no cesan en su actitud, por lo menos los del Estado no deberían seguir este juego macabro. En este aspecto hay que destacar la labor de algunas emisoras de radio y algunos órganos de prensa que sí han cumplido con su alta labor pedagógica.

El estallido ha tenido una dimensión política, pero su índole ha sido fundamentalmente social: los pobres se han apropiado de bienes, los ricos han demonizado a los pobres; y en este enfrentamiento el pueblo percibe que el Estado exhorta a los ricos y descarga o permite que se descargue el peso sobre los pobres. Venezuela: ilusión de armonía, titulaba el IESA un conjunto de ensayos sobre el país. Hoy esa ilusión ha estallado. Todos hablábamos de la brecha creciente entre ricos y pobres. Mientras esa brecha aparecía como una magnitud meramente objetiva nadie que tuviera algún poder estuvo dispuesto a correr con el costo social de luchar porque revirtiera esa tendencia tan injusta y peligrosa. Hoy esa brecha no es sólo de magnitudes económicas, es de sujetos y clases. Esta es una fase del problema mucho más negativa y peligrosa. Si pretende solucionarse a base de ideología y represión sin tocar para nada las causas objetivas, vamos a un desastre sin remedio.

Es correcto el propósito del gobierno de sincerar la economía. Pero las ganancias groseras (robo es su verdadero nombre) de la especulación sin freno es lo contrario a la sinceración,

## 12. SECUELAS Y RETOS

pues nada mira los costos y menos aún al aumento de productividad para rebajarlos. Si esto no se supera, sólo la sensatez del pueblo podrá evitar lo peor.

De allí que la situación que hemos vivido signifique un cuestionamiento para todos y cada uno de nosotros, como personas y como pertenecientes a diferentes grupos y organizaciones sociales. Un cuestionamiento que para que tenga efectos sociales no puede quedarse en la intimidad de cada persona ni en las evaluaciones grupales, menos aún en las explicaciones ideológicas que automáticamente nos afloran de acuerdo a nuestra ubicación social. Cuestionamiento que nos rete y nos lleve a proyectos de acción social realizables en los cuales comprometamos nuestra contribución a una Venezuela como la desea la mayoría de los venezolanos. Ante nosotros se abren múltiples retos de los que apenas enumeramos algunos.

En primer lugar el reto de la organización del pueblo. En esta dirección ya hay bastantes esfuerzos invertidos aunque la magnitud e importancia de la tarea los haga parecer como pocos. Los primeros resultados son, además, alentadores. El pueblo venezolano ha recorrido un larguísimo camino con mucho esfuerzo para estar donde hoy está. La experiencia de consolidar su posición y prepararse para avanzar a través de la coordinación de esfuerzos mediante la organización popular le resulta alegre y esperanzadora. Los obstáculos son inmensos. Hay que superar la propia subvaloración de sus posibilidades. Hay que aprender a la práctica cotidiana de la democracia que requiere la información constante, el diálogo, tomar en cuenta las necesidades de cada integrante, ubicarse en la globalidad de la acción para evitar los egoísmos grupales o locales tanto como el individual. Hay que capacitarse en las tareas propias de la organización y en su gerencia... Todo esto lleva tiempo, mucho tiempo, requiere de ayudas, porque nadie "nació aprendido", supone una fuerte dosis de optimismo y confianza, además de una visión global de las relaciones sociales en la que la base sean estas organizaciones entrettejidas hasta formar la sociedad que soñamos.

Un reto no menor que el anterior es el de la comunicación. No podemos seguir sustituyendo la comunicación

honesto y directa por las ideologías que deforman la visual haciendo que encasillemos a los demás en esquemas preconcebidos y que lleguemos incluso a ocultarnos nosotros mismos lo que somos para vernos con los prejuicios ideológicos. El diálogo básico en cualquier democracia supone esa comunicación transparente. En primer lugar esta es una obligación primordial del Estado y del Gobierno. Ahora somos más conscientes del daño que puede hacer darle mayor importancia a mantener una imagen que a decir la verdad. Igualmente es un reto para los partidos políticos que deben sustituir los slogans por la información y capacidad de análisis y superar el 'esquema verticalista de "bajar la línea" desde las instancias de dirección hacia abajo. Es un reto para los medios de comunicación social que pueden convertirse en útiles instrumentos de ampliar y mejorar la comunicación en lugar de pérfidos manipuladores de las masas para imponer gustos y asegurar los mercados de los anunciantes. Es un reto fundamental para las organizaciones populares y para el conjunto de la sociedad civil.

La concertación proclamada como política por el actual Presidente de la República es otro reto. La palabra sugiere la idea de un concierto. Jamás un concierto es una sucesión de solistas por mucha calidad que cada uno de ellos demuestre en la ejecución de su parte. Un concierto significa lograr la armonía compleja de sonidos emitidos por instrumentos muy disímiles entre sí que logran, precisamente conservando la diversidad y porque ella existe, un sonido único. Concertación significa la redistribución del poder y de la riqueza. Concertación significa impulsar desde todos los puntos de la esfera social tanto la reforma de las relaciones básicas de la sociedad como la reforma del Estado.

Esta reforma del Estado se plantea también como uno de los retos ineludibles en el actual momento. Parte de una profundización de lo que ha sido su papel en el proceso de modernización vivido por la sociedad venezolana en este siglo y de su caracterización dadas sus condiciones específicas tanto políticas como económicas. Requiere una discusión amplia y a fondo sobre el tipo de relaciones Estado-sociedad más convenientes para

hacer de Venezuela una democracia auténtica que cuente con un Estado expresión y servidor del conjunto social. De esa contrastación entre lo que ha sido y es el Estado con lo que queremos que sea deben desprenderse los caminos para que esa aspiración se haga realidad. También una reforma del Estado en el sentido que aquí se plantea requiere una transformación de las relaciones de poder sobre el Estado, de manera que el pueblo organizado adquiere la posibilidad de ejercerlo que las actuales relaciones de poder le impiden.

Finalmente, para la Iglesia venezolana también el 27 de febrero es un cuestionamiento que no puede dejar pasar sin examinar sus relaciones con el pueblo venezolano. Este estallido social coincidió con los 25 años de la firma del *Modus Vivendi*, ese documento que significó una liberación histórica para la Iglesia venezolana, sometida desde los comienzos de la República a la incertidumbre que significaban las atribuciones que el propio Estado se había dado en la Ley de Patronato Eclesiástico. Es el momento de preguntarnos si la liberación jurídica lograda, con mucho esfuerzo y no pocos sacrificios, en 1964, no se ha venido convirtiendo en una atadura más sutil pero más fuerte a las élites que han detentado el poder sobre el Estado y con las que se negoció el paso de la Ley de Patronato Eclesiástico al *Modus Vivendi*. La Iglesia venezolana tiene ante sí el reto de su incorporación al pueblo venezolano, de hacerse Iglesia de los venezolanos. Hacerlo como Iglesia, es decir, evangelizando. La Iglesia se constituye como tal en el ejercicio veraz de su misión anunciadora de la Buena Noticia de Jesucristo a los pobres desde los pobres. Una evangelización que también significa abrirse a recibir de los pobres la llamada de Dios. Una Iglesia que prefiera su preservación institucional a la apertura al pueblo en sus actuales condiciones no estaría en condiciones de plantearse el reto que se nos abre a partir del 27 de febrero.

Nos comprometemos desde las páginas de esta revista a contribuir a responder a la pregunta que nos hace el pueblo venezolano y a poner lo mejor de nosotros en el esfuerzo de sustituir al pueblo organizado como sujeto de la democracia venezolana.